

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Referencia: 110013335 009 **2017** 00145 00
Demandante: Mariela Poveda Cabrera
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (**FOMAG**)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
(Deja sin efectos y valor jurídico)

1. ANTECEDENTES

1.1. El 08 de agosto de 2017 este Despacho ordenó librar mandamiento de pago a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en favor de la señora Mariela Poveda Cabrera, por la cantidad de \$13.559.695 m/cte, por concepto de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías parciales (fls.41 a 44 c.1).

1.2. La anterior decisión, se notificó a la demandada el 01 de septiembre de 2017 (fl.45 c.1), que durante el término de traslado guardó silencio.

1.3. El 25 de octubre de 2017, la parte demandante solicitó el decreto de una medida cautelar, consistente, en el embargo de remanentes o de bienes que llegaren a desembargarse dentro del ejecutivo 2012-082 del Juzgado 26º Laboral del Circuito adelantado por Brígida María Llorente en contra del Ministerio de Educación Nacional, por lo que en providencia del 30 de julio de 2018 se decretó el embargo y secuestro de los remanentes dentro de aquel proceso y lo que se llegare a desembargar (fl.2 a 3 c.2).

1.4. A través del Oficio 1776-18, recibido en la Oficina de Apoyo de los Juzgado Administrativos el 17 de septiembre de 2018, en donde le informa que el Juzgado 26º dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del 24 de mayo de 2017 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que en decisión del 30 de noviembre de 2017, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y la devolución de los dineros a favor de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.

Por consiguiente, al encontrarse levantada la medida cautelar no fue tramitada la solicitud de remanente.

1.5. El 07 de diciembre de 2018, el expediente ingresó al Despacho para continuar con su trámite (fl.51).

1.6. Revisado el expediente, el Despacho encuentra que el título valor que fue objeto de mandamiento de pago, no es ejecutable por obrar en copia auténtica y no como primera copia como lo exige el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA).

2. CONSIDERACIONES

2.1. Asunto a resolver

De conformidad con los fundamentos que anteceden, al Despacho le corresponde establecer si deja sin efectos y valor jurídico el auto que libró mandamiento de pago y el que decretó de la medida cautelar en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, por cuanto el título valor no es ejecutable.

Para resolver lo anterior, se abordará en su orden i) las características y los elementos del proceso ejecutivo y de los títulos ejecutivos necesarios para que, al iniciar aquél procedimiento, sea factible imponer el pago de una obligación y ii) caso concreto.

2.2. Solución al caso

2.2.1. Del título ejecutivo

El proceso ejecutivo es el marco judicial dentro del cual se puede demandar la ejecución de obligaciones expresas, claras y exigibles cuya existencia se pueda verificar diáfananamente a través de diferentes tipos de elementos - como lo son los documentos que provienen del deudor y que constituyen plena prueba en su contra; artículo 422¹ de la Ley 1564 de 2012 (en adelante, CGP), los cuales, al demostrar dicho vínculo jurídico con las calidades referidas, prestan mérito ejecutivo, es decir, que las obligaciones que acreditan pueden ser satisfechas sin la necesidad de reconocimiento adicional alguno.

¹ "Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184".

De esta forma, se debe destacar que el inicio y continuación del proceso ejecutivo se encuentran íntimamente ligados a la existencia de ese tipo de constancias que den certeza de la existencia de una obligación con las connotaciones referidas -las cuales son conocidas como títulos ejecutivos-, es decir, que dependen de la prueba de una obligación clara, expresa y exigible respecto de la cual sólo reste cumplirla, de tal forma que sólo ante su acreditación tal como lo establezca la ley, podrá el operador judicial librar mandamiento ejecutivo -artículo 430² *eiusdem*-.

En materia de procesos ejecutivos, el título base del recaudo, para demostrar el cumplimiento de los requisitos del 297 de la Ley 1437 del CPACA, bien podría constituirse, según el numeral 5º con las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al **primer ejemplar**.

Por consiguiente, no se puede perder de vista que la prestación debe ser en favor de un acreedor y su satisfacción se verifica por una conducta de dar, hacer o no hacer, y esos títulos deben ser presentados en original o copia auténtica en la que se señale que corresponde al **primer ejemplar**, para efectos de que luego del estudio de sus requisitos formales y de fondo, se pueda librar el mandamiento de pago, punto en el que cabe señalar que la ausencia de cualquiera de esas condiciones despoja a los documentos referidos de la prerrogativa de la vía ejecutiva³.

2.2.2. Caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 297 del CAPCA menciona expresamente un listado de lo que puede configurar un título ejecutivo ante el juez de lo contencioso administrativo, disposición que al abordar los actos administrativos, específicamente señala que para que constituyan un título ejecutivo se requiere que sean aportados con constancia de ejecutoria y con la nota de que se trata de la **primera copia**.

² "Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal".

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 21 de julio de 2016, exp. 81001-23-31-000-2012-00050(56851), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

De esta forma, la ley diáfananamente establece que los actos administrativos que se presentan para conformar un título ejecutivo, sea simple o complejo, deben ser expedidos y allegados con las precisiones anotadas, so pena de que no se les pueda tener en cuenta para el inicio del proceso ejecutivo, exigencia que encuentra sentido en la protección que el ordenamiento jurídico busca otorgarle al patrimonio público.

En efecto, se ha indicado que el anterior requisito tiene como finalidad garantizar que la administración no sea ejecutada dos veces con ocasión del mismo título, lo que a su vez implica una protección para los particulares cuando se pretenda ejecutarlos.

De esta manera, es claro que en el *sub judice* es completamente inviable seguir adelante con la ejecución por la suma solicitada en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, habida cuenta de que la Resolución 5089 del 16 de septiembre de 2015 *"por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para reparaciones locativas"* no fue aportada con constancia de ser la primera copia y de encontrarse ejecutoriada, lo que implica que tal documento no fue traído con las especificaciones exigidas por la ley para que con fundamento en el mismo sea posible ejecutar judicialmente a la entidad demandada.

Por lo que en virtud de lo discurrido, y con asiento de la potestad de saneamiento otorgada por las normas procesales (el numeral ° del artículo 180 y el artículo 207 del CPACA), precisa el Despacho encaminar adecuadamente la actuación procesal en salvaguarda del debido proceso de las partes y, aplicar el aforismo jurisprudencial, según el cual *"los autos ilegales no atan al juez y a las partes"*, por lo que dejará sin efectos y valor jurídico el auto que libró mandamiento de pago (08 de agosto de 2017) y el que decretó la medida cautelar (30 de julio de 2018); y le dará el trámite de demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo solicitó la parte actora con la demanda.

En ese orden de ideas, una vez verificado que la demanda reúne los requisitos formales y legales establecidos en el artículo 161 y s.s., del CPACA, el Despacho procederá a su admisión.

En consecuencia, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá**

RESUELVE:

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS Y VALOR JURÍDICO las providencias proferidas el 08 de agosto de 2017 –mandamiento de pago- y el 30 de julio de 2018 –decreto de medida cautelar-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: ADMITIR la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora **Mariela Poveda Cabrera** quien actúa a través de apoderado judicial en contra de la **Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)**.

TERCERO: Por Secretaría **NOTIFICAR** personalmente de conformidad con el artículo 199 del CPACA (*modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso*) a las siguientes:

- (i) a la demandada Ministerio de Educación Nacional – FOMAG;
- (ii) la Agente del Ministerio Público y;
- (iii) la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado.


CUARTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría, **CÓRRASE TRASLADO** a la entidad demandada y al Ministerio Público, por el término de treinta (30) días, atendiendo lo ordenado en el artículo 172 del CPACA y Decreto 1365 de 2013.

QUINTO: SOLICITAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL que en el término de traslado de la demanda aporte copia del expediente administrativo que contenga en su integridad los antecedentes de la actuación objeto del proceso.

SEXTO: OFICIAR a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., y a la Fiduciaria la Previsora S.A., para que expidan sendos certificados sobre si actuando en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, dieron respuesta a la petición E-2016-145308 del 18 de agosto de 2016 y, en caso afirmativo, aporte la correspondiente copia del acto administrativo junto con su constancia de notificación.

SÉPTIMO: De las excepciones que proponga la parte demandada, sin necesidad de auto que lo ordene, por Secretaría **CÓRRASE TRASLADO** a la parte contraria por el término de tres (3) días de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Nulidad y restablecimiento del derecho (Deja sin efectos y valor jurídico)

Radicado: 110013335 009 **2017 00145 00**

Demandante: Mariela Poveda Cabrera

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.,
SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

Miryam Yanneth Martínez Cortes
Secretaria